



Utopía y Praxis Latinoamericana

ISSN: 1315-5216

utopraxis@luz.ve

Universidad del Zulia

Venezuela

Salazar, Robinson

Reseña "Centroamérica: democracia, militarismo y conflictos sociales en el S. XXI" de Ignacio Medina

Núñez

Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 15, núm. 49, abril-junio, 2010, pp. 111-113

Universidad del Zulia

Maracaibo, Venezuela

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27915705011>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

lo ha hecho, nos habla bien de su competencia como investigador, de su poder de síntesis y, más todavía, de su coraje para lidiar con estos temas que sólo los viejos filósofos abordan después de haber decantado su formación.

Por otra parte, en la lectura de este libro me ha impresionado la capacidad, propia de los buenos maestros, de conciliar el discurso filosófico y científico con el discurso pedagógico, sin por ello traicionar la rigurosidad y densidad de los argumentos, de su coherencia y sistematicidad.

Invito a todos a leer *El darwinismo y la religión*, con el convencimiento absoluto de que será un tiempo bien invertido, pues incluso quienes no compartan los puntos de vista expuestos tendrán la satisfacción de conocer una propuesta bien argumentada, analizada y presentada como un fructífero punto de encuentro.

Ignacio MEDINA NÚÑEZ (Coord.). *Centroamérica: democracia, militarismo y conflictos sociales en el S. XXI*. Colección Insumisos Latinoamericanos, Elaleph.com. Buenos Aires, Argentina.

Robinson SALAZAR, Universidad de Sinaloa, México.

Centroamérica tuvo que esperar 20 años para volver a tener la relevancia en las mesas de discusiones de la academia y los gobiernos. Después del protagonismo que asumió en las dos últimas décadas del siglo XX con la firma de los Acuerdos de Paz y la desactivación del conflicto bélico, la notoriedad se diluyó por varios factores: la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra fría y consubstancialmente la desintegración del bloque socialista y el arribo del modelo neoliberal con la ideología globalizadora, que declaraba el agotamiento de la vía armada para llegar al poder, la crisis del socialismo y la clausura de las puertas donde la ideología y la historia eran caja de resonancia para analizar, deliberar y tomar posturas políticas revolucionarias.

La siguiente etapa que marcó la transformación de los países centroamericanos se expresó en las siguientes características: gobiernos proclives a los mandatos de empresas transnacionales, inversiones en áreas estratégicas reservadas por el Estado, privatizaciones de los servicios públicos, carreteras, represas, construcción de hidroeléctricas con capital extranjero, interconexión de líneas eléctricas, desplazamientos humanos por la confiscación de tierras y agotamiento de agua por las contenciones de los ríos, apertura de los mercados y una tendencia fuerte por descampesinizar la economía, etc. Los flujos de dinero, por la vía de préstamos onerosos a cambio de modificar la carta Constitucional y adecuar el reglamentarismo jurídico que diera certidumbre a los inversores, orilló a muchos gobiernos del área a crimi-

nalizar las protestas, a elevar a grado de terrorismo las manifestaciones públicas, a desmontar poco a poco las estructuras sindicales progresistas, a sofocar los movimientos sociales populares, que fueron muchas veces reprimidos y ninguneados por los medios de comunicación, que los estigmatizaban como rezagos de la guerra y actores retardatarios incapaces de comprender el cambio permanente de la historia.

La muerte de líderes comunitarios fue asunto común en la vida cotidiana; las persecuciones políticas fueron parte de la limpieza social soterrada que gobiernos de derecha asentados en Guatemala, El Salvador y Honduras desarrollaban bajo la complicidad de los medios de comunicación, organismos internacionales y observadores que daban seguimiento a los Acuerdos de Paz y las muchas asignaturas pendientes durante el Siglo XXI en espera de ser resarcidos con los daños provocados durante la Guerra.

Las antiguas familias que controlaban la economía de países como El Salvador, Nicaragua y Honduras abrieron las compuertas a los nuevos ricos, quienes lucraron con la Guerra, se formaron académicamente en las universidades norteamericanas y asumieron cargo de ministros o asesores en los nuevos gobiernos. Bajo ese paraguas, acumularon dinero por favores a grandes empresas, se apropiaron de los recursos públicos del Estado, buscaron asociarse con nuevos inversores y formaron una clase dominante tecnocrática, inmune ante la justicia y protegidos por los gobiernos de turno. Prefirieron importar mercancías antes que producirlas; el campo quedó desolado porque no se invirtió en la economía campesina; el flujo de migrantes se desplazaba hacia los Estados Unidos y como caso curioso la demanda de mano de obra campesina de El Salvador la suplían los campesinos nicaragüenses; los obreros de la industria de la construcción también devenían del mismo país, mientras que los salvadoreños (al igual que muchos guatemaltecos, nicaragüenses y hondureños) prefirieron emigrar hacia el coloso del norte, fenómeno que provocó una fuerte dependencia económica de las divisas enviadas por los migrantes a sus familias, lo que a su vez disparó el consumo y fomentó la economía parasitaria.

Los gobiernos dedicaron su esfuerzo por brindar facilidades al capital foráneo, controlar las demandas sociales a través de la represión, desconocimiento de los derechos políticos, laborales y económicos; el desempleo abarató la mano de obra, y las maquiladoras provenientes de la China Nacionalista pretendieron imponer un modelo productivo maquilador sin resultados por la precariedad de los salarios, nula capacitación y escasos incentivos que al final terminaron con centros de trabajos en zonas francas que tenían forma y esencia de confinamientos laborales de tercer mundo y carentes de derecho alguno que protegiera al trabajador.

El Salvador optó en los 20 años de administración del gobierno de ARENA (Alianza Republi-

cana Nacionalista) por dolarizar y desnacionalizar la economía, tecnocratizar la universidad, cancelar los derechos de huelga, estigmatizar a los jóvenes como Maras para criminalizarlos, destruir las tendencias de una ideología política contestataria al señalarlos como terroristas y militantes de la guerrilla que se resistían a aceptar los Acuerdos de Paz; concesionó tierras para grandes proyectos empresariales, abrió las puertas a la libre importación, pactó la inserción de la Escuela de Interpol en territorio salvadoreño y base de monitoreo militar que funciona en Comalapa; asimismo firmó el Tratado de Libre Comercio que manió la economía del país a los intereses norteamericanos. Esta breve reseña de todo lo gestionado por ARENA ha tenido impacto hasta hoy, dado que el gobierno de Mauricio Funes, que arribó bajo la fórmula del FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional) orientado por Schafik Handal y Salvador Sánchez Cerén durante y en la posguerra, no ha podido destrabar la urdimbre de conflictos y compromisos que ARENA le dejó antes de entregar el poder del Estado.

Panamá también ha vivido serias contradicciones a partir de la defenestración del General Manuel Antonio Noriega. A partir de 1989, el país ha tenido gobernantes excéntricos como Guillermo David Endara Galimany de 1989-1994; lo sucedió en el cargo la fórmula de izquierda democrática de Ernesto Pérez-Balladares y González-Revilla de 1994-1999 quien gobernó con una racionalidad de derecha y con una administración cargada con severos cargos de corrupción; se dio paso a la diseñadora de interiores, Mireya Moscoso, que ligó su administración con intereses de grandes empresarios y poco aportó para la desaceleración económica que vivió el país en su gestión.

En el 2004, llegó Martín Torrijos, quien fue el reverso de lo que había sido su padre, Omar Torrijos, e hizo tan buen trabajo para la derecha que encentró las vías para el arribo del empresario Ricardo Martinelli Berrocal, quien, en el 2009, acaba de abrir las puertas para la instalación de bases militares en el territorio panameño: una afrenta que tanto repudió el pueblo panameño desde los reclamos de propiedad del Canal hasta la fecha.

Las bases militares en territorio panameño, ligadas con la guirnalda misilística que acaban de aprobar en Colombia, conforman el escudo norteamericano y plataforma para agredir pueblos y gobiernos que no compartan la ideología y los dictados que la administración norteamericana quiere imponer en la segunda década del Siglo XXI.

Guatemala en la etapa de posguerra convocó a elecciones, y el excéntrico Alfonso Portillo y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), fundado por el general golpista Efraín Ríos Montt, constituyeron el primer Gobierno de la Guatemala de posconflicto; ganó con el 68,32% de los votantes, frente a un 31,68% que había apoyado a Óscar Berger, can-

didato del gubernamental Partido de Avanzada Nacional (PAN).

Portillo tuvo destacada actuación en corrupción, persecuciones a líderes de comunidades indígenas; incorporó a las PAC (Patrullas de Autodefensa Civil) para que arrasaran con los cotos de resistencia indígenas en la zona rural; impusieron la ley del miedo y el terror y mutaron a distintas formas de paramilitarismo que muchas veces adquirieron configuración de empresas prestadoras de servicios de vigilancia, sicariato, ejército privado en Guatemala y mas allá de sus fronteras, ligándose con finqueros en Chiapas, México, y con redes del crimen organizado o carteles de la droga en el sureste del país azteca.

Los gobernantes que le sucedieron, Oscar Berger y Álvaro Colom, no han podido desactivar el paramilitarismo; las comunidades campesinas siguen viviendo el temor y la represión, dado que el paramilitarismo y el narcotráfico están coludidos para ejercer controles de territorios en el país de Rigoberta Menchú.

Los intentos por desestabilizar la actual administración de Álvaro Colom devienen de empresarios y ex militares, quienes pretenden imponer la política del terror y obtener jugosas ganancias a través del tráfico de influencias y de drogas, de ahí que asesinatos anunciados previamente, desapariciones de personas, denuncias de fraude, sobornos, amenazas golpistas,... son parte de la vida cotidiana y notas periodísticas de un país que aun no ha recibido atención sobre las lastimaduras que le dejó la Guerra de los años ochenta.

Nicaragua ha sido querida y admirada debido a la lucha que libraron "los muchachos", como se le llamaba a los integrantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que conquistaron el poder el 19 de Julio de 1979; sin embargo, el Frente perdió las elecciones del 25 de febrero de 1990, y le sucedió en la presidencia la Unión Nacional de Oposición (UNO) con su candidata Violeta Barrios de Chamorro, que fue un gobierno de derecha. Gobernaron luego Arnoldo Alemán Lacayo y Enrique Bolaños Geyer, mandatarios de corte neoliberal hasta las elecciones del 5 de noviembre de 2006 cuando volvieron a triunfar los sandinistas. El 10 de enero de 2007 retomó la presidencia el FSLN, a través de Daniel Ortega Saavedra.

El regreso del FSLN no tiene conectividad con el pasado; es un gobierno desestructurado, con rupturas internas, divisionismo que ha llegado a un estado de agresiones discursivas y poco proclives a buscar acuerdos con antiguas fuerzas que lo integran. El FSLN es muy diferente de la organización de la primera época donde tres organizaciones lo conformaban: Línea proletaria, Guerra popular prolongada y terceristas; todas convivían y respetaban acuerdos para garantizar la gobernabilidad y la autonomía del país. El desgajamiento de sus estructuras

partidarias, el rompimiento de un sector significativo que se autodenominó Renovación Sandinista y el desahelo de muchos militantes ha dejado con déficit de resortes sociales a la administración de Daniel Ortega en la actualidad.

Con aciertos y desaciertos en la política social, algunas veces errático y otras pendular en las medidas económicas, ruptura con las organizaciones europeas que apoyaban la política social del Estado pero condicionándolo, concentración excesiva de las facultades de otros órganos de gobierno en la figura presidencial e intervención en las elecciones recién realizadas en 2008 que dejó un sabor de fraude por parte del gobierno,... todo ello desalienta a los sectores populares para depositar la total confianza en el Sandinismo, sin embargo aun sigue siendo un espacio de maniobra acotado para la izquierda.

Dentro de los vaivenes y actuaciones pendulares de la administración de Daniel Ortega, los Estados Unidos, principalmente a través del embajador Robert Callahan, pretenden consolidar la oposición y promover el derrocamiento del gobierno Sandinista. Callahan, dice la especialista Eva Golinger, "perteneció a un selecto grupo de diplomáticos norteamericanos especialistas en operaciones psicológicas, algunos de los cuales son movilizados desde el Pentágono, poco antes de que en los países ocurran golpes de Estado y acciones desestabilizadoras." El embajador norteamericano, además, colabora en el grupo de John D. Negroponte y Charles Shapiro, dos piezas del intervencionismo militar norteamericano en el área.

Honduras ha sido la pieza del rompecabezas que altera la lectura de Centroamérica y reposiciona a la región en la mesa de los debates y las argumentaciones académicas. Durante años, la vida política parecía estar inalterable. Mientras el resto de la región inauguraba una etapa distinta a la conflictividad armada, en Honduras, Rafael Leonardo Callejas gobernaba de 1990 hasta 1994 sin sobresaltos, apegado a los lineamientos que le sugerían los organismos internacionales: abrió el país a las inversiones extranjeras en el rubro de las hidroeléctricas y terminó acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito. Le sucedieron Carlos Roberto Reyna (1994-98), de corte liberal y defensor de los derechos humanos, y luego Carlos Flores Facussé (1998-2002), empresario y propietario del periódico La Tribuna, proactivo defensor de los intereses norteamericanos en la región y cercan servil de los militares, miembro de las diez familias que dominan la economía del país.

Los enconos y la ola de violencia que vivía el país producto del desempleo, el monopolio excesivo, el incremento de bandas delictivas ligadas a funcionarios de gobierno y familias poderosas, militares involucrados en robo y tráfico de autos enarreció el ambiente; después del violento asesinato de su hijo, el empresario Ricardo R. Maduro fue nominado

candidato presidencial por el Partido Nacional y ganó la presidencia para el período de enero 2002 a 2006; a principios de este último año, entregó el poder gubernamental a Manuel Zelaya Rosales, del Partido Liberal. Zelaya ha sido un hombre de familia acaudalada sin perfil de izquierda pero de manera inesperada dio un giro en su administración con medidas políticas progresistas: incrementó los salarios de manera significativa, abrió la posibilidad de realizar compras de medicamentos a Cuba en detrimentos del monopolio de la industria farmacéutica internacional, ingresó el país a la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), se acercó a Venezuela para obtener petróleo barato y crédito blando bajo la organización de Petrocaribe; abrió canales de comunicación y acción con los movimientos sociales, cerró la posibilidad de concesionar tierras y minas a empresas transnacionales de Estados Unidos y Canadá y había planeado la recuperación de Palmerola como aeropuerto civil.

Ante el auge de gobiernos de izquierda en América Latina, los Estados Unidos bajo la administración Bush se preparaban para reinstaurar en el área un férreo control militar de nuevo tipo como son las dictaduras y gobiernos policiales donde el parlamento funciona sin autonomía y el ejecutivo no cuenta con facultades sino que somete su capacidad administrativa a los organismos empresariales internacionales, la vigilancia se interconecta con centros de información policiales regionales y comparten base de datos para cortar los circuitos de sublevaciones y movimientos sociales populares que tienen como objetivo alcanzar el poder.

El 28 de junio de 2009, Centroamérica entró de nuevo con fuerza en la polémica política y académica tanto a nivel nacional como internacional con el golpe de estado impulsado contra el gobierno de Manuel Zelaya. Cuando se realizaron las elecciones programadas para el 29 de noviembre 2009 en que el gobierno de facto de Roberto Micheletti le ha concedido el triunfo a Porfirio Lobo, del Partido Nacional, sin que Zelaya haya sido restituido como presidente del país, quedan muchas interrogantes sobre el proceso que vive el país; los movimientos sociales exponen sus preguntas y respuestas en la calle, problematizan a partir de lo que la agenda política ofrece cada día; la salida ante el golpe y las elecciones sigue siendo una interrogante que arrojará muchas discusiones y argumentos que harán del país y de la región un actor protagónico en la política internacional.

Mientras ello sucede, países acólitos del militarismo como Colombia, Perú, Panamá, Israel y los Estados Unidos se complacen y avalan las elecciones; otros países guardan mutismo porque temen que esa experiencia se pueda experimentar en la nación que gobiernan; la moneda está en el aire y la policia- lización de los Estados sigue su curso en Centroamérica y en gran parte de América Latina.